

El trasfondo de la ruptura de Kast con Boric y las implicancias del anuncio de investigar a su gobierno

» El actual mandatario acusó a Kast de "empañar" el cambio de mando, que ha sido el más conflictivo desde 1990 y cuyas repercusiones prometen extenderse mucho más allá del 11 de marzo

El presidente Boric pronunció una frase el pasado lunes, en entrevista a Mega, que se convirtió en la chispa de un quiebre que empezó a incubarse pocas semanas después de la victoria presidencial de José Antonio Kast, cuando se conoció un proyecto "de amarre" de Hacienda que dificultaba el despido de funcionarios públicos en el próximo gobierno.

El problema se iría agudizando con el tiempo, en especial con las acusaciones de que la actual administración ocultaba la magnitud del déficit fiscal, impulsaba nombramientos de última hora, además de tomar decisiones clave pero sin informar a las autoridades que se harían cargo del país a partir del cambio de mando.

La frase pronunciada en Mega por Boric estaba relacionada con uno de esos temas: un proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong negociado en forma reservada y en tiempo récord con una empresa china.

Lo que no era secreto es que EE.UU. se había opuesto a una iniciativa similar el 2019, en el gobierno de Sebastián Piñera, por su rivalidad con Beijing y que éste se había cancelado, por lo que era predecible que generaría un conflicto con Washington.

"Hablé con el Presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto y que Estados Unidos ya había manifestado estas amenazas", dijo el mandatario la noche del lunes.

A las 8:00 de ayer Kast llegó a La Moneda con sus futuros ministros para sostener una reunión de trabajo sobre el traspaso de mando. Poco después conversó en privado con Boric y le pidió retractarse argumentado que no eran cierto lo que dijo. Ante la negativa del presidente, dio por cancelado el encuentro y se retiró con su comitiva.

Alrededor de las 11:00, en una conferencia de prensa, dio por finalizado el proceso de traspaso y anunció que había designado un equipo para conducir una amplia investigación sobre las informaciones proporcionadas por gobierno y que usaría todas las herramientas legales para eso.

"Ponemos término al proceso porque no confiamos en la in-



formación que se nos está entregando", afirmó. "Esta fuerza de trabajo administrativa comienza hoy día para poder tener la mayor cantidad de información y poder contrastarla con los datos que nos entreguen".

Entre otras observaciones, relató que en su conversación del 18 de febrero con Boric -donde éste afirma haberlo informado del cable submarino- le solicitó no seguir tomando decisiones "que puedan dejar en una situación compleja al país".

Nuevas versiones y rol de Boric

La polémica por el cable chino tiene todos los elementos con los que el presidente electo justifica sus quejas sobre la transparencia del traspaso de mando, ya que era un asunto estratégico para el país, conducido en secreto y que, una vez que salió a la luz a contrapelo de La Moneda, se dieron versiones contradictorias.

La contradicciones prosiguieron ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en la que participaron el canciller Alberto Van Klaveren y el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz.

La cronología, con abundante documentación, muestra que la tramitación se inició en noviembre y que el 27 de enero el ministro Muñoz firmó el decreto que autorizaba la concesión del cable chino, que se implementaría en los primeros 18 meses del gobierno de Kast. Pero se paralizó dos días después.

La primera explicación para la paralización del decreto fue "un error de tipeo". Sin embargo, en la Comisión del Senado, el ministro de Transportes cambió su versión.

"(Tras la firma del decreto), llega una alerta desde la embajada de Estados Unidos sobre que este es un cable que tendría graves riesgos para la seguridad de Chile y Estados Unidos, que entrega información de ciberataques a empresas de telecomunicaciones y constructoras nacionales", dijo. "Yo tomo esos antecedentes y me dirijo a Presidencia para transmitirlos; mi sugerencia es retrotraer y dejar sin efecto lo que había firmado. Así que se procede a dejar este sin efecto", añadió.

Cuando el presidente abordó por primera vez el caso, tras la revocación de las visas a EE.UU. de Muñoz y otros dos funcionarios, en ningún momento se refirió a que la concesión había sido autorizada y posteriormente suspendida tras una conversación con el ministro en las oficinas presidenciales.

"Espero que todos como país, nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena (...) No aceptamos, no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile", señaló esa vez el mandatario.

También afirmó que se había analizado el proyecto como un "tema de Estado", pese a que después quedó claro que había sido manejado reservadamente

por un grupo integrado solo por funcionarios del gobierno.

Otra declaración sorprendente en la comisión del Senado fue la del canciller Alberto van Klaveren, quien dijo que le había informado del tema a su sucesor Francisco Pérez Mackenna en una reunión el 3 de febrero. La información que dio van Klaveren cuando se conoció públicamente el caso, fue que el proyecto estaba "en evaluación, en una fase muy inicial".

La investigación y su impacto político

El anuncio de Kast de impulsar una auditoría al gobierno de Boric equivale a una

declaración de guerra, otra constatación de que el actual traspaso de mando es el más conflictivo desde el regreso de la democracia en 1990.

El presidente electo enfatizó en su conferencia de prensa que el problema que más le importaba respecto de la información recibida del actual gobierno era el déficit fiscal que heredaría, con una deuda bruta del gobierno central cercana un 41,7%.

El mensaje político es claro: Kast recibirá un país con una economía mucho más deteriorada de lo que esperaba, lo que reafirma su relato de un "gobierno de emergencia" y también ayuda a bajar la expectativas que generó en su campaña electoral.

La formación de una "fuerza de tarea" para realizar una auditoría significa que el tema se incorpora a la agenda de la nueva administración y pasa a integrar el arsenal político para tratar de arrinconar al menos a una parte de la oposición.

Analistas políticos suelen recordar que las promesas de auditoría de los gobiernos entrantes a sus antecesores pueden resultar por un tiempo, pero implican riesgos. El principal es que muchas veces es difícil comprobar eventuales irregularidades y se puede terminar emitiendo un certificado de buena conducta a quienes se busca sancionar.

Ex Ante

